"El Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben colocar el clima, la gente y la naturaleza al centro de sus operaciones"

Las organizaciones miembros de la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) presentamos este posicionamiento en el marco de las **Reuniones de Primavera 2025 del Grupo Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),** con el objetivo de exigir a estas instituciones compromisos concretos y reformas estructurales que promuevan un sistema financiero internacional más sostenible, equitativo y resiliente.

El contexto actual presenta **múltiples desafíos,** especialmente para los países del Sur Global, que enfrentan dificultades económicas cada vez mayores para responder a los **impactos del cambio climático y la crisis de la deuda, agravada por un limitado espacio fiscal.** En 2020-2021, más de la mitad del financiamiento climático global se canalizó mediante instrumentos de deuda, mientras que las donaciones apenas representaron el 6% del total (SCF, 2024a). En América Latina y el Caribe, más del 90% de los recursos climáticos se otorgan en forma de préstamos (GFLAC, 2024), empeorando la crisis de deuda soberana y reduciendo el espacio fiscal para otras prioridades de desarrollo.

El año 2025 es clave para el financiamiento climático, ya que muchos países aún deben presentar -en el marco del Acuerdo de París- sus **nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés),** para cuya implementación los países en desarrollo requerirán un apoyo financiero significativo. En 2024, al menos 98 países presupuestaron 2.753 acciones que requieren financiamiento (el 48% del total) dentro de sus NDC. Dichas necesidades oscilan entre 455 y 584 mil millones de dólares anuales hasta 2030 (SCF, 2024b). En el caso de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de las NDC requiere entre 215 y 284 mil millones de dólares anuales hasta 2030 (CEPAL, 2024).

Tras el débil acuerdo alcanzado en la 29° Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) respecto al **nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG por sus siglas en inglés) de financiamiento climático,** que establece la movilización de 300 mil millones de dólares anuales -una cifra claramente insuficiente-, se vuelve imperativo acelerar acciones que no sólo permitan alcanzar ese compromiso, sino también impulsar una transformación profunda del sistema financiero internacional.

En este contexto, y como uno de los resultados del NCQG, se propuso la creación de la **Hoja de Ruta de Bakú a Belém para movilizar 1,3 billones de dólares,** contemplando el apoyo para la implementación de las NDC y los planes nacionales de adaptación (NAP por sus siglas en inglés). Esta iniciativa será uno de los temas centrales en el camino hacia la COP30 en Brasil. Su concreción requiere de un esfuerzo coordinado para cerrar las brechas de financiamiento, especialmente en materia de adaptación. De lo contrario, el cumplimiento de los compromisos climáticos y la búsqueda de una mayor ambición será muy difícil para la mayor parte de los países en desarrollo.

En la región, los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono superan 19 veces los ingresos provenientes del financiamiento climático y para la biodiversidad. En paralelo, los presupuestos asignados a sectores intensivos en carbono son 12 veces mayores que aquellos

dirigidos a la sostenibilidad (GFLAC, 2024). Para cambiar esta realidad, las instituciones financieras internacionales (IFIs por sus siglas en inglés) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) deben reformar su funcionamiento, garantizando que todos los flujos de financiamiento sean consistentes con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, en línea con el **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París**[1]**.**

Ante este escenario, destacamos **once prioridades clave** que deben ser impulsadas en el marco de las Reuniones de Primavera 2025 y de cara a la COP30:

1. **Incremento del financiamiento para la adaptación**: más allá de duplicarlo para 2025, como se acordó en la COP26 en 2021, es necesario aumentarlo al menos diez veces para equilibrarlo con el financiamiento para la mitigación. En 2019-2020, más de la mitad del financiamiento para adaptación se otorgó en forma de préstamos, mientras que solo el 31% correspondió a donaciones (SCF, 2024c). Esta tendencia debe revertirse, priorizando mecanismos no basados en deuda para evitar aumentar la carga financiera de los países en desarrollo.

   Las IFI deben priorizar el financiamiento para la adaptación, y éste debe ser uno de los principales aspectos a ser considerados en la Hoja de Ruta de Bakú a Belém.

2. **Financiamiento urgente para pérdidas y daños:** como entidad fiduciaria del Fondo para Responder a las Pérdidas y los Daños, el GBM debe garantizar que los recursos para atender las pérdidas y los daños sean nuevos, adicionales, predecibles y adecuados. Se debe evitar que este financiamiento se base en deuda y asegurar el acceso directo para las comunidades que viven en estado de mayor vulnerabilidad.

3. **Financiamiento para la protección de la naturaleza:** la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y la naturaleza en general, debe colocarse al centro de las operaciones de las IFI. Además de asegurar la alineación con los compromisos climáticos, es fundamental asegurar la convergencia con los objetivos de biodiversidad y evitar perpetuar un modelo de extracción que está incrementando la devastación de ecosistemas enteros. Aunado a esto, el modelo de protección debe considerar a las personas defensoras de dichos territorios.

4. **Fortalecimiento de salvaguardias sociales y ambientales:** es necesario implementar salvaguardias para prevenir financiamiento a actividades dañinas, incluyendo la exclusión de financiamiento para actividades que violen los Derechos Humanos; el consentimiento libre, previo e informado de Pueblos Indígenas; y actividades que afecten negativamente áreas sensibles en términos de biodiversidad.

5. **Mejoras en el acceso al financiamiento climático:** es urgente que las IFI simplifiquen los procedimientos y faciliten el acceso directo al financiamiento para Pueblos Indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.

[1] La *submission* a la CMNUCC de REDFIS sobre los temas, partes interesadas y otros procesos relevantes para los talleres 2025 del Diálogo de Sharm el-Sheij está disponible en: https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202503041123---REDFIS-Submission%20Art.%202.1.c.pdf?_gl=1*1wp0yl1*_ga*MTYzMjAyNzUxNy4xNzQwNDAwMjE1*_ga_7ZZWT14N79*MTc0NDExMzU4MS40OC4wLjE3NDQxMTM1ODQuMC4wLjA.

Esto debe incluir mecanismos de financiamiento innovadores para acciones colectivas basadas en criterios no mercantiles y un aumento significativo en la proporción de donaciones.

6. **Deuda y crisis climática:** el modelo de financiamiento del GBM y el FMI no debe aumentar el endeudamiento de los países en desarrollo ni presionarlos a explotar sus recursos naturales.

   Se deben impulsar mecanismos de alivio de deuda vinculados a la acción climática, en línea con lo acordado sobre el NCQG en la COP29, donde se exhortó a las IFI y los BMD a implementar instrumentos no basados en deuda y ampliar el financiamiento altamente concesional[2].

7. **Descarbonización de las finanzas públicas:** el GBM y el FMI deben excluir todo financiamiento a los combustibles fósiles y revisar sus metodologías de alineación con el Acuerdo de París. En 2022, los subsidios globales a los combustibles fósiles alcanzaron un récord de 7 billones de dólares, equivalente al 7,1% del PIB mundial (FMI, 2023). Sin una eliminación progresiva de estos incentivos a la industria de los combustibles fósiles, cualquier esfuerzo por redirigir recursos hacia el desarrollo sostenible será insuficiente.

8. **Un nuevo pacto fiscal:** en el marco de estos espacios internacionales, se debe llamar al establecimiento de impuestos a los grandes emisores y a quienes poseen mayores recursos y realizan actividades contaminantes. Estos ingresos deben destinarse a una transición justa y equitativa, considerando las necesidades específicas de cada país de la región.

9. **Democratización de la gobernanza financiera:** las IFI deben reformar sus estructuras de toma de decisiones para garantizar una representación más equitativa y dar voz a los países y comunidades más afectadas por la crisis climática.

10. **Asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG):** es necesario revisar el sistema de distribución de los DEG para asegurar que los países más vulnerables reciban un apoyo adecuado, mediante asignaciones basadas en necesidades reales y no en cuotas desproporcionadas del FMI.

11. **Transformación del rol del FMI:** la estrategia climática del FMI debe priorizar la transición hacia energías renovables y la resiliencia climática en lugar de imponer condicionalidades que perpetúen la dependencia de combustibles fósiles en países del Sur Global.

REDFIS exhorta al FMI y al GBM a adoptar medidas concretas para garantizar que el sistema financiero internacional responda con urgencia a la crisis climática y facilite una transición justa. Para ello, es fundamental reformar el funcionamiento de estas organizaciones, garantizar que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, y cerrar la brecha de financiamiento climático en la región.

[2] La *submission* a la CMNUCC de REDFIS sobre las expectativas, temas e iniciativas multilaterales relevantes para la ""Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia los 1,3 billones" del NCQG está disponible en: https://unfccc.int/documents/646131